

MARÍA CECILIA CIFUENTES H.
DIRECTORA EJECUTIVA CENTRO ESTUDIOS FINANCIEROS

¿Somos tan fiscalmente responsables como creemos?

El Mercurio
6 de octubre de 2020

Existe en parte del mundo técnico y político la percepción de que Chile no solo se ha caracterizado por la responsabilidad fiscal de las últimas décadas, sino que además habría tenido un exceso de conservadurismo en esta materia. Hace poco esto fue catalogado como un “sobreseguro”, mientras el país vivía evidentes carencias sociales. ¿Confirman los datos esta percepción? Si tomamos el resultado fiscal promedio de todos los países del mundo en los últimos treinta años, usando la base de datos del FMI, podemos ver que Chile ocupa el puesto número 22 dentro de los de mejor resultado fiscal, con un superávit promedio de 0,7% del PIB, por lo que indudablemente podemos ser catalogados como un país con buen manejo en materia fiscal mirado desde esa perspectiva temporal. De todas formas, nos superan países cuyos resultados admiramos, como Noruega, Singapur, Hong Kong, Corea y Luxemburgo, entre otros. Sin embargo, ese buen lugar en la tabla cambia en forma significativa si consideramos el periodo 2013-2019, cuando producto del fin de la bonanza del cobre y de los buenos resultados de crecimiento, hemos visto un deterioro importante de la situación fiscal. En efecto, en estos siete años el déficit fiscal promedió un 1,9% del PIB, ocupando el lugar número 71 en el mundo, con un resultado no muy distinto al déficit promedio mundial. Los países nórdicos, Alemania y Nueva Zelanda, por ejemplo, muestran resultados bastante mejores que el nuestro. Por lo tanto, si en algún momento tuvimos un “sobreseguro” en materia fiscal, eso ya no parece ser cierto en la situación actual, es decir, si en algún momento “pagamos una prima un poco alta”, “la siniestralidad” de estos años la ha justificado.

Pero más allá de estos números, es necesario preguntarse por el origen de los buenos resultados fiscales anteriores a 2013. Recordemos que en 2001 se estableció la regla estructural, y no precisamente como un mecanismo de ahorro fiscal, sino como una forma de gastar más, en un contexto de un precio del cobre por debajo de lo que se pensaba era su tendencia de largo plazo. En efecto, el precio del cobre de largo plazo en ese momento fue estimado en US\$0,9/libra, con un precio efectivo de US\$0,7/libra. De esa forma se pudo establecer un mayor nivel de gasto de lo que permitían los ingresos efectivos. No se sabía en ese momento que a partir de 2003 se iniciaría una década de bonanza espectacular de commodities que, respetando la regla, se traducían en un ahorro fiscal elevado. Dadas las presiones políticas, la regla se modificó varias veces para aumentar los espacios de gasto, y, de hecho, entre 2001 y 2019, mientras el PIB creció a una tasa promedio de 3,7%, el gasto público lo hizo a un 6% real, y el gasto en subsidios a más de un 8% real al año. No parece desprenderse de estas cifras la idea de que la macro dejó de lado las demandas sociales, ¿o la recomendación hubiera sido seguir los pasos de países como Argentina o Brasil, donde el aumento del gasto público se

consumió toda la bonanza de términos de intercambio e incluso más? Me parece más bien que, mirado en retrospectiva, hubo en Chile un equilibrio razonable entre las presiones políticas por más gasto y la sostenibilidad fiscal. A la hora de evaluar qué tan responsables somos en materia fiscal, no debemos olvidar que es fácil que una familia que durante 10 años seguidos se gana la lotería logre acumular un stock de ahorro, sin que por eso podamos decir que son excesivamente austeros. Sería lo que la prudencia haría recomendable. Por el contrario, no sería sensato que esa familia continuara aumentando su ritmo de gasto una vez que la suerte la abandona, y si lo quiere hacer, le diríamos que ahora tiene que esforzarse más, aumentar sus ingresos y aprovechar de reasignar aquello que ahora parece superfluo o redundante. En materia fiscal no hemos sido capaces de hacerlo, considerando que para satisfacer crecientes demandas sociales se requería que el país siguiera creciendo y pudiéramos, además, mejorar la eficiencia del Estado.

En definitiva, las carencias que efectivamente tenemos en materia social no se explican por un exceso de prudencia fiscal, sino porque los servicios del Estado han seguido siendo muy deficientes. Lo que habría que preguntarse es por qué con un gasto social per cápita que se multiplicó por más de tres veces en las últimas dos décadas, no ha ocurrido lo mismo con la calidad de los servicios entregados por el Estado.

La conclusión: parece que somos menos responsables de lo que creemos, la plata se gastó, pero se gastó mal, y mientras no se reforme el aparato administrativo, eso seguirá ocurriendo.